



“QUE SE VAYAN TODOS”, OTRA VEZ, EN PERÚ

Pablo Stefanoni*

21 de diciembre de 2022

Resumen

La decisión de Pedro Castillo de cerrar el Congreso, que desde el comienzo actuó de manera obstruccionista e intentó una y otra vez destituirlo, fue un salto al vacío que acabó con la detención del mandatario. Proveniente del Perú profundo, el presidente nunca pudo armar un gobierno y se recostó en un círculo opaco de colaboradores que acabó generando un fuerte aislamiento del jefe de Estado. La nueva presidenta se enfrenta hoy con fuertes protestas que demandan la disolución del Congreso, más impopular que Castillo, y el adelanto electoral para 2023, en un nuevo capítulo de una sucesión de crisis políticas que llevó a la mayoría de los expresidentes a la prisión.

Introducción

El 7 de diciembre de 2022 al mediodía, el aún presidente Pedro Castillo apareció en televisión y anunció con un discurso tembloroso la disolución temporal del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y un gobierno de excepción por medio de decretos ley junto con una próxima convocatoria a elecciones para un Congreso constituyente. Declaró, además, el toque de queda en todo el territorio nacional. Fueron 10 minutos que acabaron con 18 meses de gobierno en los que Castillo no encontró la forma de dar un rumbo a la maquinaria estatal y actuó de manera errática, casi con el único objetivo de no ser destituido por un Congreso que conspiró desde el primer día de su gobierno.

En un comienzo, el gabinete de ministros representó a las diversas sensibilidades de izquierda —incluida la urbana, que proveyó figuras como el economista Pedro Francke— pero las dificultades de los ministros para coordinar con el presidente y, de manera más amplia, la deriva del gobierno, fueron alejando a muchos de sus colaboradores. Castillo cambió más de 70 ministros y tuvo cinco presidentes del Consejo de Ministros en un año y medio. A veces, los giros ideológicos fueron abruptos, como el pasaje de Mirtha Vásquez (abogada de derechos humanos y cuestiones ambientales) a Héctor Valer, quien militó en el partido Renovación Nacional (extrema derecha) en el cargo de *premier*.

En todo ese periodo, el Congreso —de mayoría opositora pero fragmentada— intentó una y otra conseguir los votos necesarios para tumbar al presidente bajo la imprecisa figura de “incapacidad moral permanente”, y este se terminó rodeando

* Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es jefe de Redacción de la revista *Nueva Sociedad* e investigador asociado de la Fundación Carolina.



de círculos de confianza cada vez más cerrados y opacos, que incluían dirigentes de su región natal, y la corrupción en la administración pública activó diversas investigaciones fiscales que llegaron cada vez más cerca de Castillo.

Su decisión de disolver el Congreso fue un salto al vacío. Sin apoyo político ni militar, ni fuerza en las calles, el autogolpe terminó siendo contra sí mismo. Y la decisión resulta particularmente inexplicable dado que el Congreso carecía de la mayoría especial para destituirlo en la tercera la votación de vacancia prevista para ese mismo día. En pocos minutos, sus ministros comenzaron a renunciar en desacuerdo con la decisión del presidente —y por temor a sus consecuencias legales— y el Congreso consiguió —esta vez, con extrema rapidez— los votos para *vacarlo* en medio de la aceleración de la crisis. Pocos se animaron a rechazar la vacancia.

En dos horas, Castillo pasaba de la disolución del Congreso a ser detenido por sus propios escoltas, cuando intentaba dirigirse a la embajada de México. La rapidez de la detención dejó ver, además, una articulación político-burocrática entre los militares, congresistas y poder judicial para contragolpear al presidente en el límite de la legalidad. En los grandes medios, analistas y periodistas no escondían su excitación por el vuelco en la situación y las críticas al gobierno combinaban argumentos sobre el deterioro institucional y la incapacidad de Castillo al frente de la presidencia, con la emoción de sentir que habían expulsado a un intruso que, debido a la crisis de representación de la política peruana y la implosión de su sis-

tema de partidos, había recalado en el Palacio presidencial. Esta arrogancia de clase explica, en parte, la ola de protestas que siguió a la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte por sucesión constitucional.

Del campo a la ciudad, de “rondero” a presidente

Oriundo de la provincia de Chota, en la región de Cajamarca, Pedro Castillo tuvo un momento de proyección nacional en 2017, cuando lideró una huelga de maestros que, con un fuerte impulso desde las bases, desconoció los acuerdos entre el sindicato, dirigido por el partido Patria Roja, y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). El sector combativo contaba con el apoyo del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (el sindicato docente) vinculado al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), un grupo legal ligado a los restos del grupo guerrillero Sendero Luminoso. Por eso, los maestros y el propio Castillo fueron en ese momento “terruqueados”, como llaman en Perú al hecho de acusar a los adversarios de terroristas como arma política. Los medios se preguntaban entonces, ¿quién es Pedro Castillo, el líder de la huelga?

Pero en 2021, esa huelga estaba lejos, y pocos recordaban ya al maestro de Chota. Castillo, que había pertenecido al partido centrista Perú Posible, del expresidente Alejandro Toledo, fue parte de los intentos de crear un partido magisteral, pero la pandemia y la falta de recursos complicó esos planes. Finalmente, terminó postulando por el partido Perú Libre, comandado por Vladimir Cerrón. Este neuroci-



rujano formado en Cuba y exgobernador regional de Junín no podía postular por razones judiciales, y entonces habilitó la candidatura de Castillo sin pensar ni en sueños que podría ganar la presidencia. Castillo se afilió a Perú Libre pocos días antes del vencimiento del plazo para la inscripción de candidatos para las elecciones de abril de 2021.

El sindicalista fue entonces a Lima a inscribirse. Su esposa Lilia Paredes, integrante de la Iglesia Cristiana del Nazareno, cuenta en un documental que los vecinos iban a preguntarle a su casa por qué Pedro no aparecía en los medios si era candidato a la presidencia¹. En efecto, Castillo estuvo durante la primera etapa de la campaña fuera de los radares de los grandes medios y analistas —hasta febrero de 2021 medía entre 1% y 3% en las encuestas de IPSOS/El Comercio—. En marzo saltó a un todavía modesto 6%. En una campaña donde los postulantes subían y bajaban, y nadie terminaba de despegar, pasó así al *top five*. Otra vez, muchos se volvieron a hacer la pregunta ¿quién es Pedro Castillo? Y varios recordaron la huelga de 2017, su discurso “populista” y “radical” y lo volvieron a acusar de vínculos con Sendero Luminoso.

Perú Libre, el partido que lo postulaba, se define como “marxista-leninista-mariateguista”, pero al mismo tiempo se presenta como una “izquierda provincial”, lo que, en una nación como Perú, dividida entre el país profundo y las élites limeñas, adquiere un sentido particular.

“Cuando sales a pedir derechos dicen que eres terrorista”. “Terrorista es el hambre y la miseria, el abandono, la desigualdad y la injusticia”. Con un sombrero chotano que nunca abandonaba, Castillo le habló a ese Perú que se siente históricamente excluido. No se presentó como indígena sino como campesino y “rondero”, en referencia a las rondas campesinas creadas en Cajamarca —su región— en los años setenta para enfrentar el abigeato y que se replicaron luego en el país en los años ochenta para hacer frente a la guerrilla de Sendero Luminoso, y funcionaban muchas veces como instancia de autoridad en el campo (Starn, 1991). Su estrategia de campaña fue hacerse fuerte primero en las pequeñas localidades para, desde esos territorios en los que podía jugar de local, lanzarse a las grandes ciudades y, finalmente, intentar conquistar Lima. “Del campo a la ciudad”, como soñaban los antiguos maoístas peruanos, pero esta vez, el poder debía provenir de los votos y no de “la boca del fusil”. De hecho, Castillo no llevaba un fusil sino un lápiz gigante a cada mitin. “La máxima arma que podemos utilizar es el teléfono, es una herramienta. La tecnología ayuda a llevar el mensaje, cuando este es transparente, sencillo”, dijo entonces Richard Rojas, una de las pocas personas que acompañaba a Castillo por las regiones, donde el candidato daba entrevistas a medios locales y pronunciaba discursos transmitidos por Facebook. La camioneta que usaban era del propio Rojas. Aunque Castillo proviene del norte, su mayor convocatoria era originalmente en el sur, zona atravesada por una gran densidad organizativa y una fuerte tradición indigenista y antilimeña.

¹ Disponible en:
www.youtube.com/watch?v=tLp9zCSNGJw.



Finalmente, Castillo le ganó a Keiko Fujimori por 50,13% a 49,87%. Ambos pasaron a la segunda vuelta con menos del 20% de los votos. Para tratar de llegar a la mitad más uno, dependieron del temor cruzado. La mitad del país votó contra el “comunismo” —incluido el escritor Mario Vargas Llosa— y la otra contra la vuelta de un Fujimori al poder.

Política y economía, ¿asuntos separados?

En las elecciones de abril de 2021 había una gran variedad ideológica para elegir, desde las izquierdas “provincianas” y “urbanas” hasta la extrema derecha, pasando por el nacionalismo y el neoliberalismo. Keiko Fujimori, Hernando de Soto, Verónica Mendoza, Rafael López Aliaga y el propio Castillo buscaban mantenerse a la cabeza de las encuestas, pero las preferencias ciudadanas eran marcadamente volátiles. En un país que fue duramente golpeado por la pandemia, y que ha visto implosionar su sistema partidario, los partidos se parecen a emprendimientos personales y ser “antipolítico” es una buena carta de presentación electoral.

El autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 fue sin duda un punto de inflexión. En ese entonces, una gran parte de la población peruana estaba dispuesta a tolerar el autoritarismo y las violaciones de los derechos humanos a cambio de la derrota del terrorismo, que tenía a Sendero Luminoso como una de sus expresiones más emblemáticas. Liderado por Abimael Guzmán, autodenominado “presidente Gonzalo”, este grupo maoísta no ahorró violencia para tratar de hacerse con el poder mediante la guerra popular prolongada. Fujimori, que había derrotado a Vargas Llo-

sa por 62% contra 37,6% en las presidenciales de 1990, se aprovechó de ello para gobernar sin la molestia de las instituciones democráticas.

La economía pareció desconectarse de la política. “La inesperada victoria de Alberto Fujimori frente a Vargas Llosa, favorito en todas las encuestas, no supuso, sin embargo, la derrota de la coalición social que había respaldado al escritor”, escribió Carlos Adrianzén. Las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores de la Iglesia católica, las élites empresariales y los organismos internacionales sostuvieron a Fujimori, que fue reelegido en 1995 con más de 64% de los votos (Adrianzén, 2014). Dos años antes, había logrado la aprobación de un nuevo texto constitucional. Finalmente, el “Chino” terminó renunciando en el año 2000 mediante un fax enviado desde Tokio tras el escándalo de los denominados “vladivideos” que reveló un grado de corrupción generalizada en el gobierno (RPP, 2018). En 2005 fue detenido en Chile y extraditado a Perú dos años más tarde, donde cumple una condena de 25 años de prisión.

Pese a triunfos de candidatos como Ollanta Humala en 2011, con críticas al neoliberalismo, quedó fuera del ciclo progresista que tiñó a gran parte de la región. Y Keiko Fujimori quedó una y otra vez cerca de la presidencia (48,56% en 2011, 49,88% en 2016, 49,87% en 2021). El fujimorismo sobrevivió a su fundador, pero no logró sacarlo de la cárcel.

Para el politólogo Alberto Vergara “la precariedad de la política peruana ha sido funcional al éxito del modelo económico”. Al momento de escribir sobre el pri-

mer año de la presidencia de Ollanta Humala (2011-2016), Vergara se preguntaba: “¿No habría, más bien, que escribir sobre este pétreo sistema político, económico, cultural que se apresta a cumplir veinte años en el país, y al que le da exactamente igual si los gobernantes son democráticos o autoritarios, exaltados o tímidos, expertos o novatos, con partido o sin partido?” (Vergara, 2012).

Vergara atribuía a estabilidad del modelo peruano al macroarreglo institucional surgido con la Constitución de 1993 “que cimenta la forma en que se articulan Estado, sociedad y mercado”. Ese macroarreglo se mantuvo, tras la caída de Fujimori, bajo los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. El país experimentó entre 2003 y 2013 tasas de crecimiento promedio de 6% del PIB, con una fuerte reducción de la pobreza. El PIB per cápita de 2012 estaba un 66% por encima del de 2002 y era más del doble de su nivel de 1992. Como muestra de continuidad en la tecnocracia, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, ocupa el cargo desde 2006 hasta el día de hoy. Pero ya entonces (mediados de 2012), Vergara percibía los límites de ese consenso y algunas de sus reflexiones adquirieron una especial actualidad en los siguientes años, cuando la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski abrió un periodo de gran inestabilidad política. El politólogo peruano identificaba cuatro elementos novedosos que daban cuenta del comienzo del agotamiento del macroarreglo del 93:

En primer lugar, la sociedad ya no es una petrificada masa posconflicto. Lleva una década reclamando, boicoteando y perfeccionando el oficio de bajarle la llanta a las intenciones

proempresariales del Gobierno. En segundo lugar, las autoridades subnacionales cuentan con muchos recursos, lo cual energiza la protesta si ellas se alinean con sus movimientos sociales. En tercer lugar, las autoridades nacionales [...] poseen cada vez menos capacidades políticas. [...] El sostenido enriquecimiento de la sociedad peruana les ha administrado esteroides a todos los actores *menos* a las estructuras políticas e institucionales que deberían mediar entre los codiciosos actores en disputa. Si todas estas tendencias siguen acentuándose, aquello que era funcional al éxito del modelo económico (la precariedad política) puede revertirse y ser, más bien, el origen del fin del exitoso ciclo (Vergara, 2012).

En efecto, los siguientes años verán la caída de varios presidentes y el enjuiciamiento y prisión de casi todos quienes pasaron por la Casa de Pizarro, además de numerosos gobernadores y alcaldes. El caso más dramático fue el de Alan García —quien fue uno de los políticos más carismáticos y populares del país— que para evitar la detención optó por dispararse un tiro en la cabeza. Ese momento, Adrianzén se preguntó si la muerte de Alan García era también la de la élite política peruana.

Un año después, el mismo autor escribía que la crisis del fujimorismo, la enorme fragmentación y dispersión del voto, y la sorpresa del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), con tonalidades milenaristas, se sumaban a una reconfiguración del eje izquierda/derecha en Perú. Refiriéndose a las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020, Adrianzén escribió que “mientras que en 2016 las tres primeras fuerzas políticas acumulaban 84% de las bancas; hoy los tres primeros alcanzan solo 47%. Mientras que hace cuatro años la primera fuerza política logró 56% de los escaños, el 26 de enero de 2020 el partido más votado ha obtenido tan solo



19% de los asientos en el Parlamento” (Adrianzén, 2020). La votación del Frepap —vinculado a una facción del evangelismo y cuyo eslogan era “El agro al poder”— expresó el hartazgo con la clase política y, como lo haría Castillo más tarde, la reacción antilimeña del Perú profundo. Pero lo significativo es que en 2020 ni Castillo ni Perú Libre estaban en el terreno de juego y que en 2021 los que sí capturaban el inconformismo, como el Frepap, estaba de nuevo en la marginalidad electoral. Si Perú libre pasó de cero a 37 parlamentarios en ese lapso, el Frepap pasó de 16 a cero. Como síntoma de la crisis, el otrora mítico y centenario Partido Aprista Peruano perdió su inscripción en 2021.

La legislación peruana, permite “vacar” al presidente con tres quintos del Congreso unicameral y establece la obligación del poder ejecutivo de someter a los presidentes del Consejo de Ministros al voto de confianza de los congresistas. Si el Congreso rechaza la confianza a dos candidaturas elevadas por el jefe de Estado, este puede disolverlo y convocar a elecciones de manera inmediata para conformar otro. Esa fue la razón de las mencionadas elecciones especiales de 2020 tras la disolución del Congreso por el presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre de 2019. Todo ello ha dado lugar a fuertes choques de poderes y hoy está sobre la mesa una reforma política que permita reordenar una institucionalidad que, en un contexto de fragmentación y el uso de la vacancia como forma de chantaje político, es una de las fuentes (no la única) de inestabilidad política en el país. En 2020, tras la destitución de Vizcarra por el nuevo Congreso, las protestas populares contra el

“golpismo” —y contra la desigualdad social— comenzarían a jugar su propio rol en la crisis peruana, que aparecería desde entonces como una nueva normalidad.

El cambio que no fue

A diferencia de Evo Morales, que antes de llegar a la presidencia en 2005 había sido jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), había negociado como dirigente de los campesinos cocaleros con diferentes gobiernos y era regularmente invitado al exterior, Castillo dio un salto directo de Cajamarca a Lima con su experiencia como sindicalista de provincias como único capital. También a diferencia de Bolivia, donde la sede de Gobierno, La Paz, es una ciudad plebeya y tradicionalmente combativa, que blindó el poder de Morales, Lima fue desde el comienzo un territorio hostil para el nuevo presidente. Mientras que el triunfo del MAS fue el resultado de un largo declive de las élites señoriales del occidente andino, desafiadas por nuevas élites económicas de origen indígena, Castillo llegó al gobierno casi de casualidad, por haber quedado bien ubicado en las encuestas en la última semana previa a las elecciones. Finalmente, mientras Morales contaba con la enorme fuerza del MAS, un partido de sindicatos con una fortísima capilaridad territorial, Castillo compitió como invitado de un partido cuya fuerza era muy limitada.

Mientras la derecha lo seguía considerando una suerte de comunista a la espera del zarpazo, la izquierda se decepcionaba de la falta de políticas transformadoras. “El pecado original de Pedro Castillo no solo fue cómo armó sus gabinetes de ministros



sino cómo dio lugar a opacos entornos palaciegos”, sintetizó la excongresista de izquierdas Marisa Glave (Stefanoni, 2022). La prensa los denominó, no sin desprecio, “los chotanos” o “los chiclayanos” por sus zonas de origen. Y se trató en algunos casos de financiadores de la campaña de Castillo que terminaron repartiéndose áreas del Estado.

De esta forma, las denuncias de corrupción, que comenzaron a llegar cada vez más cerca del presidente —la primera dama es investigada por la Fiscalía— se solaparon con la reacción de las élites ante el “asalto cholo” del poder.

Castillo no solo se distanció de la izquierda “caviar” sino también de Perú Libre². De modo que su base se fue reduciendo y nunca pudo conseguir una tregua de la oposición en el Congreso. Este ya nació fragmentado y se siguió fragmentando luego, por ejemplo, con varias divisiones de la bancada de Perú Libre. Como parte del acoso, el Congreso impidió al mandatario realizar varias salidas al exterior, como el viaje a Colombia para la posesión de Gustavo Petro o a la cumbre de la Alianza del Pacífico. De nada sirvió que, en febrero pasado, Castillo abandonara el sombrero chotano y se mostrara con traje para descampesinizar su figura.

² Este partido mantiene una guerra abierta contra “los caviar” y posiciones bolivarianas en el plano de la política regional: “No tenemos una alianza con la ultraderecha, lo que hay es una coincidencia espontánea anticaviar. Coincidimos porque combatimos a un enemigo común, que es la izquierda caviar, la socialdemocracia. No puedo hacer una alianza con los ‘oenegeros’ aliados de USAID. Podemos coincidir con el fujimorismo y con otros, pero con la izquierda caviar no, ellos son nuestro enemigo principal”, declaró Cerrón.

El racismo atraviesa el discurso político peruano. Ya durante la campaña, el periodista Beto Ortiz echó a la candidata al Congreso Zaira Arias de su set televisivo, mostrando que la “corrección política” no llegó a sectores de las élites limeñas. Luego la llamó “verdulera” y más tarde se disfrazó de indio —con su histrionismo habitual— para darle la bienvenida de manera socarrona al “nuevo Perú” de Pedro Castillo. Hace pocos días, un congresista fujimorista se refirió de manera despectiva a una autoridad de Puno, localidad ubicada en el sur del país, por llamar “hermanos” a los congresistas, un término habitual en el mundo aymara. El congresista Ernesto Bustamante interrumpió a la autoridad regional increpándolo: “¡Acá en Lima se dice señores!” Y luego continuó: “Una persona que dice que no está incluido en la Constitución del Perú porque no menciona a pueblos originarios, ¿qué cosa quiere, que mencione a los que viven en su cuadra?”. Durante las protestas que sucedieron a la destitución de Castillo un presentador de televisión preguntó a un jefe policial: ¿Por qué no les han metido un tiro en la cabeza?³ La pregunta no era retórica: al momento de escribir este artículo, la cantidad de muertos ascendía a 26 (Turkewitz, 2022).

La decisión presidencial de cerrar el Congreso sorprendió a la mayoría de los ministros y recibió el rechazo de la izquierda democrática. Esta consideró la decisión como un golpe frustrado que recordaba el autogolpe de 1992, aunque más que convertirse en dictador Castillo diera un ab-

³ Ver tuit: <https://twitter.com/PiensaPrensa/status/1601225585711550465>.



surdo manotazo de ahogado. Desde una visión más pragmática, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón consideró que el presidente se apresuró. Hoy nadie logra explicar qué llevó a Castillo a tomar esa decisión ni quienes lo convencieron de ella.

En ese momento, había una enorme presión para desmarcarse del estigma de “golphismo”; por eso el alejamiento de casi todos los colaboradores del presidente (incluso de su abogado). Pero con el paso de las horas, las imágenes se fueron modificando. Sobre todo, se fue instalando la sensación de que el Congreso, más impopular que Castillo (casi 90% de imagen negativa) se había salido finalmente con la suya. Y la detención del expresidente, y el linchamiento mediático, lo fueron victimizando. En ese marco, estallaron varias protestas. La consigna más movilizadora y unificadora es la de cierre del Congreso y nuevas elecciones, a lo que se suma en varios sectores la consigna de Asamblea Constituyente para abordar cuestiones estructurales.

Los prefectos nombrados por el gobierno de Castillo, muchos de los cuales pertenecen a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate) y a Perú Libre, son parte de las movilizaciones. En pocas horas, lo que parecía una sucesión constitucional legítima, se fue transformando para muchos en una transición ilegítima, en la que Dina Boluarte habría sido finalmente funcional a la “coalición vacadora” y de las élites prepotentes, con la vicepresidenta —una funcionaria pública con escasa trayectoria política— como instrumento del “Congreso corrupto”. Según una encuesta del

Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 71% de los consultados mostró su desacuerdo con que Boluarte haya asumido la presidencia. Y las movilizaciones se extendieron por diversas zonas el país, así como la represión policial y los allanamientos contra sedes de diversas organizaciones sociales.

Las protestas tienen como estructura una mezcla de los sindicatos, economías informales y sectores campesinos, que se fue articulando de diversas formas con autoridades locales.

Un ejemplo de la radicalidad que tomaron las protestas fue el abucheo a Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, y representante de una versión radical del nacionalismo peruano de base andina, acusado por la multitud de “reconocer” a Boluarte como presidenta. Antauro propone fusilar a los expresidentes corruptos, incluido su hermano a quien además considera un “traidor” (Infobae, 2002) y se propone ser la expresión del inconformismo social desde un etnonacionalismo “antiextranjero” denominado “etnocacerismo” (Stefanoni, 2005). Otros, como el alcalde electo de Lima, un empresario de extrema derecha que se dice enamorado de la Virgen María, y comentó en varias entrevistas que se autoflagela para unirse a la pasión de Cristo⁴, buscan que la crisis decante por la derecha.

En este contexto, Boluarte trata de hacer equilibrios para seguir en el poder. Por lo pronto le pasó “la pelota” del adelanto electoral al Congreso y ha prometido bonos a los agricultores, afectados por una

⁴ Pueden verse sus declaraciones en: www.youtube.com/watch?v=FuL6kPeNGGQ.

sequía histórica, y aumento a los funcionarios públicos. Si en su investidura juró hasta 2026, luego redujo su horizonte a 2024, mientras continúa la discusión sobre la fecha de las nuevas elecciones. La nueva presidenta ha destituido al presidente del Consejo de Ministros una semana después de haberlo nombrado, mientras crecen las denuncias sobre la violenta represión de las protestas. Dos ministros

renunciaron por ese motivo. Aunque pidió una tregua al momento de asumir, es poco probable que la consiga. El congresista de Perú Democrático —un desprendimiento de Perú Libre— Guillermo Bermejo amenazó: “Si no encuentra asilo político [Dina Boluarte] va a terminar presa”. Por ahora, sigue la crisis y los riesgos de que haya más muertes también.

Conclusiones

- Pedro Castillo llegó al gobierno en una elección caracterizada por la fragmentación en la primera vuelta y la polarización en la segunda, y ganó por una mínima diferencia contra Keiko Fujimori. La mitad del país votó contra el fujimorismo y la otra mitad contra el “comunismo”.
- Tras postular por el partido Perú Libre, el gobierno de Castillo perdió primero el apoyo de la izquierda urbana y luego se distanció de la izquierda “provinciana”, mientras se recostaba cada vez más en un círculo opaco que mezclaba política y negocios.
- Desde el comienzo, la oposición de derecha intentó destituirlo desde el Congreso por “incapacidad moral permanente”, mientras Castillo mostraba un rumbo errático y cambiaba permanentemente de ministros.
- La decisión de Castillo de cerrar el Congreso cambió el escenario político y una amplia mayoría de los parlamentarios votó en favor de la vacancia, tras lo cual fue detenido mientras buscaba asilo en la embajada mexicana.
- Dina Boluarte lo sucedió en un clima de protestas sociales que promueven la disolución del Congreso y el adelanto electoral para 2023. La represión ya ha causado más de 25 muertes.

Referencias bibliográficas

- ADRIANZÉN, C. (2014): “Una obra para varios elencos. Apuntes sobre la estabilidad del neoliberalismo en el Perú”, *Nueva Sociedad* n° 254, noviembre-diciembre. Disponible en: <https://nuso.org/articulo/una-obra-para-varios-elencos-apuntes-sobre-la-estabilidad-del-neoliberalismo-en-el-peru/>.
- (2020): “¿Quién ganó y quién perdió en las últimas elecciones peruanas?”, *Nueva Sociedad*, ed. digital, febrero. Disponible en: <https://nuso.org/articulo/elecciones-Peru-Vizcarra-Fujimori/>.
- INFOBAE (2022): “Antauro Humala volvió a desearle la muerte a su hermano Ollanta después de llamarlo ‘traidor’”, *Infobae*, 25 de septiembre. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/peru/2022/09/25/antauro-humala-vuelve-a-desearle-la-muerte-a-su-hermano-ollanta-tras-llamarlo-traidor/>.
- RPP (2018): “Los ‘vladivideos’ que marcaron el final del régimen de Alberto Fujimori”, *RPP*, 21 de marzo. Disponible en: <https://rpp.pe/politica/gobierno/los-vladivideos-que-marcaron-noticia-1111709>.
- STEFANONI, P. (2005): “¿Qué son y que quieren los entonaceristas?”, entrevista con Cecilia Méndez, *El Viejo Topo*, n° 205-206, abril. Disponible en: <https://www.history.ucsb.edu/wp-content/uploads/39-Que-son-y-que-quieren-los-etnocaceristas.pdf>.
- (2022): “De Pedro Castillo a Dina Boluarte o la crisis interminable de Perú”, entrevista a Marisa Glave, *Nueva Sociedad*, ed. digital, diciembre. Disponible en <https://nuso.org/articulo/pedrocastillo-peru-boluarte/>.
- STARN, O. (1991): *Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales*, Lima, IEP.
- TURKEWITZ, J. (2022): “Una pausa en las protestas de Perú para honrar a los muertos”, *The New York Times*, 19 de diciembre.
- VERGARA, A. (2012): “Alternancia sin alternativa: ¿Un año de Humala o veinte años de un sistema?”, *Argumentos*, julio. Disponible en: <https://argumentos-historico.iep.org.pe/articulos/alternancia-sin-alternativa-un-ano-de-humala-o-veinte-anos-de-un-sistema/>.



Fundación Carolina, diciembre 2022

Fundación Carolina
Plaza del Marqués de Salamanca nº 8
4ª planta, 28006 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
@Red_Carolina

https://doi.org/10.33960/AC_26.2022

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)